



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo conexo
DEMANDANTE	OLT Transportes S.A.S.
DEMANDADOS	Montacargas y Transportes Integral S.A.S. y Liberty de Seguros S.A.
RADICADO	05001 31 03 005 2022 00321 01
DECISIÓN	Declara inadmisible recurso de apelación y confirma decisión

Medellín, diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte codemandada Liberty Seguros S.A.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 4 de octubre de 2022 el Juzgado 005 Civil del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago en favor de OLT Transportes S.A.S. y frente a las ejecutadas, i) por valor de \$183 047 836 por concepto de capital, derivado de la ANS o multas impuestas, suma que debía ser indexada desde el 3 de marzo de 2022, hasta el pago total de la obligación; ii) por valor de \$150 000 000 por concepto de capital, suma entregada y no retornada a título de anticipo, la cual debía ser indexada desde el 3 de marzo de 2022 hasta el pago total.

El despacho en mención profirió auto en que decretó el embargo del establecimiento de comercio denominado Montacargas y Transporte Integral S.A.S. (antes Logística de Transporte Integral S.A.S.) con matrícula mercantil 21-602458-12, propiedad de la demandada; el embargo del establecimiento de comercio llamado Liberty Seguros S.A. con matrícula mercantil 21-025841-02,

propiedad de la demandada; el dinero que, por cualquier concepto, tuviese la sociedad Montacargas y Transporte Integral S.A.S. en varios bancos, según lo solicitado

1.2. Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de Liberty Seguros S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, con el fin de que se reponga lo resuelto y en su lugar el juzgado se abstenga de librar mandamiento de pago respecto de la compañía que representa. También pidió se repusiera el auto que decretó medidas cautelares frente a Liberty Seguros S.A. o que en su defecto sea dejado sin efectos. Subsidiariamente, reclamó que en caso de negar lo pretendido se conceda la alzada y que se fije caución para evitar la práctica de la medida cautelar o para el levantamiento de la misma.

Con ese propósito, sostuvo que la parte demandante pretende la ejecución del fallo de primera instancia de 3 de marzo de 2022 dictado en el proceso Rad. 005-2021-00079-00, en el cual se obligó solidariamente a Liberty Seguros S.A. al pago de unas condenas líquidas, amparadas en la póliza No. 3074517. Aunado a ello, el fallo mencionado fue apelado y el recurso fue concedido en el efecto devolutivo, sin que se haya proferido fallo de segunda instancia que resuelva dicho recurso. Adujo que si bien el artículo 323 del C.G.P. no supedita el cumplimiento de la obligación a las resultas de la providencia apelada, dicha norma sí lo hace respecto a la entrega de dineros, pues la sentencia de segunda instancia puede modificar o revocar el valor concedido en la primera instancia. En este sentido, arguyó que el título ejecutivo presentado no se encuentra en firme, por lo que no es exigible.

Sobre el auto que decreta medidas cautelares insistió en que la condena frente a Liberty Seguros S.A. no está en firme según el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, por lo que no se podía decretar medidas cautelares. Alegó que los embargos no cumplían con los criterios de necesidad y proporcionalidad, porque la compañía comporta una garantía en sí misma, no solo por la responsabilidad empresarial y la clara consolidación en el mercado de seguros, sino también porque la existencia de la póliza de seguros No. 3074517, en principio tiene un objetivo claro como es el amparo y cobertura de siniestros como el del presente caso. Además, según el Decreto 2973 de 2013, la compañía debe hacer reservas técnicas, para salvaguardar su

solvencia y garantizar los intereses de los tomadores y asegurados, manteniendo adecuados niveles patrimoniales, siempre vigilados por la Superintendencia Financiera, por lo que la parte demandante nunca, respecto de Liberty Seguros S.A. tendría en riesgo la materialización de los derechos reconocidos en este litigio.

1.3. Surtido el traslado del recurso sin pronunciamiento de la contraparte, el juzgado de primer nivel en proveído de 7 de julio de 2023, resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable, por lo que mantuvo incólume la decisión y concedió la alzada.

Las razones de lo resuelto se centraron en que, la sentencia de condena, para que sirva como título ejecutivo, por lo general requiere estar en firme o ejecutoriada; sin embargo, en los eventos en que la apelación se concede en el efecto devolutivo (numeral 2 del artículo 323 del C.G.P.) es posible intentar el cumplimiento parcial de la misma, aunque no esté ejecutoriada. Explicó que de los tres efectos en que se podía tramitar ese recurso, a saber, suspensivo, devolutivo y diferido, el segundo permitía la continuación del proceso en primera instancia, mientras se surte la apelación ante el superior, es decir que, a diferencia del suspensivo, en el devolutivo no existe parálisis del trámite de primera instancia.

Destacó que, para perseguir ejecutivamente la condena impuesta en un fallo jurisdiccional, debía cumplirse el procedimiento establecido en el artículo 306 del estatuto procesal, lo cual debe ser interpretado en armonía con las reglas previstas en el artículo 305 ibídem, las cuales señalan que se puede exigir la ejecución de las providencias frente a las cuales la apelación se haya concedido en el efecto devolutivo.

En lo atinente a las medidas cautelares, expuso que el legislador no previó una prohibición para el decreto de medidas cautelares en el trámite de ejecución de la condena, pues la única restricción prescrita en el artículo 323 del CGP se refiere a la entrega de dineros u otros bienes hasta tanto la apelación de la sentencia sea resuelta. Por último, el juez señaló que el pago de la caución fijada a instancias de la parte codemandada levantó las cautelares decretadas.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 321 del Código General del Proceso establece la procedencia del recurso de apelación y cuáles son las providencias susceptibles de ser recurridas por esa vía. Al respecto, la norma señala:

"ARTÍCULO 321. PROCEDENCIA. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

...

4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.

...

8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.

...".

2.2. Por su parte, el artículo 599 del estatuto procesal prevé la procedencia del embargo y secuestro en el proceso ejecutivo.

"ARTÍCULO 599. EMBARGO Y SECUESTRO. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

...

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.*

...

En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento

(10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito. ...”

CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al librar mandamiento de pago y decretar medidas cautelares frente a Liberty Seguros S.A., por considerar que se cumple con los presupuestos del artículo 305 del C.G.P., y porque el legislador no previó una prohibición para el decreto de medidas cautelares en el trámite de ejecución de condena, pues la única restricción se encuentra en el artículo 323 ibídem y se refiere a la entrega de dineros u otros bienes.

Al respecto, esta dependencia judicial analizará por separado lo atinente a cada decisión, pues en relación con el auto que libró mandamiento de pago, el recurso de apelación es improcedente, ya que, según el principio de taxatividad y el numeral 4 del artículo 321 del estatuto procesal, es apelable el auto que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo; pero en este caso la providencia impugnada no se encuadra en esos supuestos. Por tanto, el recurso debe declararse inadmisibile.

Ahora, en relación con el decreto de las medidas cautelares de embargo del establecimiento de comercio denominado Montacargas y Transporte Integral S.A.S. (antes Logística de Transporte Integral S.A.S.) con matrícula mercantil 21-602458-12; del establecimiento de comercio denominado Liberty Seguros S.A. con matrícula mercantil 21-025841-02; de los dineros que por cualquier concepto tuviese la sociedad Montacargas y Transporte Integral S.A.S. en los bancos Davivienda, Bancolombia y Bogotá, medida que se limitó a \$500 000 000; y de los dineros que por cualquier concepto tuviese Liberty Seguros S.A.

en los bancos Bancolombia y de Bogotá, medida que se limitó a la suma de \$285 000 000, es de advertir que a la parte recurrente no le asiste razón, en tanto, el embargo y secuestro proceden de conformidad con lo previsto en el artículo 599 del Código General del Proceso y lo que ella aduce en cuanto a que en el proceso ordinario Rad. 05001-31-03-005-2021-00079-01, la sentencia proferida por el Juzgado 005 Civil del Circuito no está firme, no impide las medidas cautelares porque en el trámite se constata que el recurso de alzada interpuesto frente al fallo fue concedido en el efecto devolutivo, es decir, que la impugnación no suspendía el cumplimiento de la sentencia, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 323 del C.G.P.

Adicionalmente, tampoco tiene vocación de prosperar el argumento elevado por la parte recurrente, dirigido a señalar que cualquier medida cautelar que afecte a Liberty Seguros S.A. no cumpliría con los criterios de necesidad y proporcionalidad, en tanto, la compañía comporta una garantía en sí misma, no solo por la responsabilidad empresarial y la clara consolidación en el mercado de seguros, sino también porque la existencia de la póliza de seguro No. 3074517 tiene un objetivo claro que es el amparo y cobertura de siniestros como el del presente caso, debido a que, los requisitos enunciados son objeto de análisis para el decreto de medidas cautelares innominadas y no para el decreto del embargo y secuestro, unido a que, tal como el juez indicó no existe prohibición alguna al respecto, salvo la restricción de entrega de dineros u otros bienes prevista en el artículo 323 del estatuto procesal.

En conclusión, el recurso de apelación frente al auto que libró mandamiento de pago de 4 de octubre de 2022 proferido por el Juzgado 005 Civil del Circuito de Medellín debe ser declarado inadmisibile, y la providencia que decretó medidas cautelares será confirmada.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR inadmisibile el recurso de apelación frente al auto de 4 de octubre de 2022 que libró mandamiento de pago, proferido por el Juzgado 005 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. CONFIRMAR la decisión del proveído de 4 de octubre de 2022 del mismo juzgado, mediante el cual decretó las medidas cautelares.

TERCERO. Sin condena en costas porque no se causaron.

NOTIFÍQUESE



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada